

**SENADO DE PUERTO RICO**

**P. del S. 6**

2 de enero de 2013

Presentado por los señores *Bhatia Gautier* y *Ruiz Nieves*

*Referido a la Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos*

**LEY**

Para enmendar los Artículos 4.02, 4.03, 5.05A, 5.08, 5.09, 6.01 y 6.02 de la Ley 404-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico”, a los fines de integrar la figura de responsabilidad vicaria, dentro de los remedios disponibles en la esfera civil, en beneficio de toda persona que experimente perjuicio producto de la venta, prestación, ofrecimiento, entrega o disposición de un arma de fuego sancionada por Ley, utilizada para cometer un delito; incluir dentro de las actuaciones cobijadas por este estatuto, la compraventa de un arma de fuego sin que el armero confirme que el adquirente posee una licencia para ello, el tráfico ilegal de armas automáticas, la fabricación, posesión y distribución de armas blancas, la posesión o venta de accesorios para silenciar y la facilitación de armas a un tercero; y para otros fines.

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

La Ley 404-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico”, establece la estrategia gubernamental, cívica y comunitaria para prevenir, intervenir y erradicar la venta, fabricación, importación y distribución de armas ilegales. En este contexto, esta iniciativa establece los parámetros necesarios para autorizar la portación y posesión de un arma de fuego, imponer restricciones para limitar su acceso y proveer las herramientas necesarias para erradicar el trasiego ilegal de las mismas. Sin embargo, las medidas adoptadas en virtud de este mandato, han sido insuficientes para erradicar la prevalencia de armas ilegales, por lo que nos corresponde mantener una revisión continua de este estatuto, para subsanar las deficiencias experimentadas y garantizar la seguridad de nuestros constituyentes.

Se estima que durante los últimos diez (10) años, 8,000 puertorriqueños han muerto producto de la violencia asociada a un arma de fuego, tendencia que se ha mantenido inamovible durante el pasado año, el ciclo con el mayor número de asesinatos de nuestra historia, al alcanzar la cifra

de 1,135 muertes violentas. Sin embargo, aunque las referidas muertes, están directa o indirectamente relacionadas con la utilización de estas herramientas, nuestra jurisdicción se encuentra dentro de las localidades que menos condenas obtienen por delitos relacionados a la Ley de Armas. Ante esta realidad, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, ha señalado que un porcentaje mínimo de nuestra población penal, se encuentran confinados por delitos consumados mediante un arma de fuego, dato que contrasta con la actividad delictiva que experimentan nuestros ciudadanos en sus respectivas comunidades y la rigurosidad que caracteriza a las presunciones dispuestas en este mandato, las cuales establecen, entre otras, que la posesión o portación de un arma sin licencia y/o con un número de serie mutilado, representa evidencia *prima facie* de que la misma será utilizada en la comisión de un acto delictivo. En este contexto, podemos señalar que indistintamente de las disposiciones de este estatuto, la impunidad caracteriza el procesamiento de estos delitos, escenario que se agrava ante el nivel de reincidencia de la población penal, ascendente al 65.7% de nuestros confinados.

Sin embargo, a pesar de la alta incidencia de crímenes violentos suscitados en nuestra jurisdicción, el Estado ha sido incapaz de ofrecer soluciones concretas a estas deficiencias. En este contexto, nuestras instituciones públicas adolecen de los recursos necesarios, tanto estatutarios como fiscales, para garantizar una fiscalización efectiva de las 345,000 transacciones que son realizadas cada año, para autorizar la portación y/o posesión de una arma de fuego, mediante la compraventa, el traspaso de titularidad y/o la renovación de licencias, 125,000 de las cuales corresponden a modelos de alto poder, tales como la AR-15, AK-47 y calibre 50. Este universo es representativo de la flexibilidad existente para la adquisición de estas herramientas, a pesar de que, por ejemplo, la utilización deportiva de las mismas, se encuentra vedada en nuestra jurisdicción, por lo que la competitividad recreativa, no representa la causal para validar la adquisición de estos artefactos.

Ante la incapacidad del Estado para subsanar estas deficiencias, la agenda legislativa que históricamente ha sido propuesta, se ha limitado a ubicarnos en un enfoque punitivo, basado en aumentar penas, vedar el acceso a iniciativas de rehabilitación y limitar los derechos y las defensas disponibles en beneficio de las personas imputadas de delito, indistintamente de la severidad de la conducta señalada y la etapa procesal en que se encuentre la adjudicación de responsabilidad de estos ciudadanos. Sin embargo, aunque esta práctica se agrava durante cada periodo electoral, no existe ningún estudio científico, que valide la existencia de una relación

causal entre el incremento en la represión del Estado para encausar a un ciudadano, y la reducción en la comisión de estos actos delictivos.

Pero, a pesar de la ausencia de científicidad de este acercamiento doctrinal, existen dos (2) momentos en la historia reciente, donde la aplicabilidad de esta teoría se ha agudizado. En primer lugar, las consultas constitucionales realizadas en los años 1994 y 2012, para limitar el derecho a la fianza y contrarrestar los asesinatos suscitados durante este periodo. En segundo lugar, la aprobación de la Ley 190-2009, una modalidad estatutaria de la consulta anterior, para imponer mayores restricciones para acceder este derecho.

Acorde con esta reforma, las personas imputadas de los delitos dispuestos en el Artículo 5.01 de la Ley de Armas, sobre *Fabricación, Importación, Venta y Distribución de Armas*, el Artículo 5.07 sobre *Posesión o Uso Ilegal de Armas Automáticas o Escopetas de Cañón*, el 5.08 sobre *Posesión o Venta de Accesorios para Silenciar* y el 5.10 sobre *Remoción o Mutilación de Número de Serie o Nombre de Dueño en el Arma de Fuego*, entre otros, se encuentran privados del pago del diez por ciento (10%) del pago de su fianza, para acceder su libertad condicional. Además, establece que las compañías fiadoras están impedidas de participar en este proceso y la persona natural responsable de emitir el pago correspondiente, tendrá un término de cinco (5) días, prorrogable por circunstancias especiales, para obtener una certificación procedente del Departamento de Hacienda, que haga constar que el fiador es un contribuyente bona fide y que sus ingresos justifican la procedencia del dinero prestado. En caso de que éste no pueda cumplir con este requisito, podrá validar la procedencia de los mismos, en una vista argumentativa, ante un magistrado. De lo contrario, la fianza prestada será devuelta y la custodia preventiva de este ciudadano, será retenida por el Estado. Sin embargo, a pesar de esta rigurosidad, para garantizar la transparencia de estos fondos, esta estrategia gubernamental, no ha redundado en un decrecimiento de las conductas sancionadas en este mandato. Al contrario, la incidencia de estos actos delictivos ha aumentado, por lo que esta visión restrictiva del comportamiento punible, ha fracasado.

Sin embargo, aunque la falta de iniciativas para contrarrestar el trasiego de armas ilegales, ha sido una constante, en el año 2004 se consumó un esfuerzo loable en el que la Policía de Puerto Rico recibió un mandato de ley, para erradicar la práctica prevaleciente en la jurisdicción puertorriqueña, centrada en ofrecer información especulativa sobre las transacciones realizadas por la ciudadanía, durante la adquisición de armas de fuego y sus respectivas municiones. En

virtud de este modelo, se cuantificó que, durante el primer año de vigencia de este estatuto, las treinta y seis (36) armerías responsables de despachar estas herramientas, viabilizaron la venta de 3.4 millones de balas a la población civil. Un año más tarde, las referidas transacciones alcanzaron la cifra de 5.5 millones de balas, aumento que no estuvo relacionado con un incremento en la otorgación de licencias y/o la inauguración de nuevos centros de venta.

Sin embargo, el agravante sobre la libre circulación de municiones entre la población civil, se encuentra arraigada en la ausencia de regulaciones para la disposición de casquillos vacíos, una vez estos han sido detonados, a pesar de que las autoridades policíacas se encuentran advertidas de que los mismos son recargables mediante la importación de pólvora. Esto significa que, sin considerar los datos correspondientes a la compraventa ilegal de armas de fuego y sus respectivas municiones, sobre los cuales no existe certeza, el Estado desconoce cómo se han utilizado las treinta y siete (37) millones de balas vendidas a la población civil durante la última década, y se encuentra enajenado sobre cuál ha sido su destino, una vez las mismas han sido detonadas.

En la actualidad, existe una prohibición para que un armero autorice la compraventa de un arma, a una persona que adolece de una licencia para adquirir la misma. De lo contrario, se expone a una pena máxima de veinticinco (25) años de cárcel. Sin embargo, esta sanción no ha representado un disuasivo para erradicar esta práctica. Por esta razón, la enmienda propuesta integra la figura de la responsabilidad vicaria, un remedio civil que amplía las causas de acción de un ciudadano que experimenta un daño por las actuaciones negligentes o culposas de un tercero, que consuma el acto, utilizando el arma de fuego despachada contraria a la ley. De esta forma, la persona afectada puede reclamar tanto a la persona que comete el acto culposo, como al armero que autorizó la transacción sancionada por este estatuto, dado a que, al amparo de esta doctrina, este último es responsabilizado por los actos del primero.

Además, la enmienda propuesta extiende este remedio para cubrir las actuaciones derivadas del comercio ilegal de armas de fuego automáticas, la fabricación, posesión y distribución de armas blancas, la posesión o venta de accesorios para silenciar, la facilitación de un arma a un tercero, la fabricación, distribución, posesión y su uso y la venta de municiones a personas sin licencia o en exceso del límite dispuesto en este mandato.

Ante esta realidad, la Asamblea Legislativa considera impostergable enmendar la Ley Núm. 404, *supra*, para ampliar los remedios civiles disponibles en beneficio de un ciudadano que

experimenta un daño, producto de la actuación culposa o negligente de un armero que autoriza una compraventa o una transacción que se encuentra vedada por este estatuto. De esta forma, limitaremos el tráfico ilegal de armas, artículos complementarios para consumir delitos y sus respectivas municiones, entre otros, al disuadir la consumación de irregularidades integrando una figura disponible dentro de la responsabilidad civil extracontractual, para limitar la compraventa de estas herramientas, acorde con las restricciones características de nuestro ordenamiento.

**DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:**

1 Artículo 1.- Para enmendar el Artículo 4.02 de la Ley 404-2000, según enmendada, para  
2 que lea como sigue:

3 “Artículo 4.02. Prohibición contra vender armas a personas sin licencia.

4 Ningún armero entregara un arma de fuego a un comprador sin que...

5 El armero que a sabiendas...

6 Una convicción...

7 *Además, el referido armero responderá civilmente, al amparo de la figura de la*  
8 *responsabilidad vicaria, por los perjuicios ocasionados a un tercero, al autorizar la venta de*  
9 *un arma de fuego, sin que un comprador tenga la licencia correspondiente para ello”.*

10 Artículo 2. Para enmendar el Artículo 4.03 de la Ley 404-2000, según enmendada, para  
11 que lea como sigue:

12 “Artículo 4.03. Comercio de armas de fuego automáticas.

13 Toda persona que venda...

14 Este delito no aplicará...

15 *Además, esta persona responderá civilmente, al amparo de la figura de la*  
16 *responsabilidad vicaria, por los perjuicios ocasionados a un tercero, al consumir la venta de*  
17 *un arma de fuego automática”.*

1 Artículo 3. Para enmendar el Artículo 5.05A de la Ley Núm. 404-2000, según  
2 enmendada, para que lea como sigue:

3 “Artículo 5.05A. Fabricación, posesión y distribución de armas blancas.

4 Toda persona que...

5 La prohibición establecida...

6 *Además, esta persona responderá civilmente, al amparo de la figura de la*  
7 *responsabilidad vicaria, por los perjuicios ocasionados a un tercero, al consumir una*  
8 *transacción de un arma blanca, sin que aplique una de las excepciones dispuestas en este*  
9 *Artículo”.*

10 Artículo 4. Para enmendar el Artículo 5.08 de la Ley Núm. 404-2000, según enmendada,  
11 para que lea como sigue:

12 “Artículo 5.08. Posesión o venta de accesorios para silenciar.

13 Toda persona que tenga en su posesión...

14 Las disposiciones de este Artículo...

15 *Además, esta persona responderá civilmente, al amparo de la figura de la*  
16 *responsabilidad vicaria, por los perjuicios ocasionados a un tercero, producto de la venta,*  
17 *prestación, ofrecimiento entrega o disposición del referido instrumento, dispositivo, artefacto*  
18 *o accesorio, que silencie o reduzca el ruido del disparo realizado con el arma en*  
19 *controversia”.*

20 Artículo 5. Para enmendar el Artículo 5.09 de la Ley Núm. 404-2000, según enmendada,  
21 para que lea como sigue:

22 “Artículo 5.09. Facilitación a terceros.

23 Toda persona que con intención...

1 *Además, esta persona responderá civilmente, al amparo de la figura de la*  
2 *responsabilidad vicaria, por los perjuicios ocasionados a un tercero, al facilitar, con*  
3 *intención criminal, un arma a un tercero”.*

4 Artículo 6. Para enmendar el Artículo 6.01 de la Ley Núm. 404-2000, según enmendada,  
5 para que lea como sigue:

6 “Artículo 6.01. Fabricación, distribución, posesión y uso.

7 Se necesitará...

8 Será considerado...

9 *Además, la persona que violente las disposiciones de este Artículo, responderá*  
10 *civilmente, al amparo de la figura de la responsabilidad vicaria, por los perjuicios*  
11 *ocasionados a un tercero”.*

12 Artículo 7. Para enmendar el Artículo 6.02 de la Ley Núm. 404-2000, según enmendada,  
13 para que lea como sigue:

14 “Artículo 6.02. Venta de municiones a personas sin licencia; límite en el número de  
15 municiones.

16 Una persona con licencia de armas...

17 Toda infracción a lo dispuesto...

18 Una persona con licencia de armas...

19 Toda infracción a lo dispuesto...

20 Se considerará como circunstancia agravante...

21 *Además, el referido armero responderá civilmente, al amparo de la figura de la*  
22 *responsabilidad vicaria, por los perjuicios ocasionados a un tercero, al autorizar la venta de*

- 1 *municiones, sin que un comprador tenga la licencia correspondiente para ello o en exceso de*
- 2 *los límites dispuestos en esta Ley”.*
- 3 Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.